

**INE/CG1264/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-75/2018 Y ACUMULADO SCM-RAP-96/2018**

## **A N T E C E D E N T E S**

**I. Aprobación de la Resolución.** El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG/1110/2018 y la Resolución identificada con el número **INE/CG1111/2018**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, diputados locales y alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada, el diecisiete de agosto dos mil dieciocho, el C. José Máximo Pérez Romero, interpuso recurso de apelación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, a fin de controvertir la parte conducente del Dictamen y la Resolución citados, mismo que se tuvo por recibido el expediente, integrándose bajo el número SCM-RAP-75/2018.

Posteriormente, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, el C. José Máximo Pérez Romero, interpuso un segundo recurso de apelación ante la Sala Regional aludida, a fin de controvertir nuevamente la parte conducente del Dictamen y de la resolución referidos, el cual fue identificado con el número SCM-RAP-96/2018.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México, determinó acumular los recursos de apelación y resolverlos, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, determinando en sus Puntos Resolutivos, lo que se transcribe a continuación:

*“PRIMERO. Se acumula el Recurso de Apelación SCM-RAP-96/2018 al Recurso de Apelación SCM-RAP-75/2018 de este año. En consecuencia, glósese copia certificada de esta sentencia, al expediente acumulado.*

*SEGUNDO. Revocar parcialmente, la Resolución impugnada, para los efectos precisados en la sentencia.”*

**IV.** Derivado de lo anterior, la resolución relativa al recurso de apelación **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado** revocó parcialmente el Dictamen Consolidado INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018, para los efectos siguientes:

- En lo que respecta al número de eventos de la conclusión 12.13\_C1\_P2, para otorgar garantía de audiencia y emitir una nueva resolución.
- En relación a la individualización de la sanción impuesta al candidato independiente, a efecto de realizar una nueva a la luz del “*Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad*”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, la Sala señala que esta autoridad, “*podrá, de manera enunciativa y no limitativa, analizar en la nueva determinación lo siguiente:*

- *Allegarse de mayores elementos para conocer las (sic) discapacidad, real y actual del recurrente.*
- *Solicitar la documentación necesaria para saber la capacidad económica actual del Actor*
- *De considerar de manera objetiva alguna discapacidad, deberá sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad del Actor.*
- *Tener presente un enfoque amplio de la discapacidad.*
- *Considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de discapacidad.”*

Por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables.

**V.** En virtud de lo anterior, esta autoridad realizó las siguientes diligencias:

- **Garantía de audiencia y requerimiento de información al C. José Máximo Pérez Romero.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/43198/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al C. José Máximo Pérez Romero, otrora candidato independiente a la Alcaldía de Magdalena Contreras, a efecto de proporcionarle garantía de audiencia respecto del número de eventos reportados extemporáneamente de manera previa a su realización. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia SCM-RAP-75/2018 y acumulado, se le solicitó la documentación que permitiera conocer la discapacidad real y actual con la que vive, así como las aclaraciones que considerara pertinentes.
- b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. José Máximo Pérez Romero dio respuesta al requerimiento formulado, remitiendo la documentación correspondiente.

- **Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43170/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Servicio de Administración Tributaria informara el régimen fiscal bajo el cual se encuentra inscrito el C. José Máximo Pérez Romero, así como la última declaración de impuestos presentada.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-0221, la Administradora de Evaluación de impuestos Internos "5", dio respuesta a la solicitud formulada

- **Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43167/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la CNBV informara las cuentas a nombre del C. José Máximo Pérez Romero, y remitiera los estados de cuenta correspondientes al año dos mil dieciocho.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito con número de folio E/IN3-1809-008998-HOS, la CNBV remitió respuesta parcial a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información al Instituto Nacional de Rehabilitación.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43168/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración del Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.
- b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INRLGII-DM3/400/18, la Subdirectora de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje del Instituto Nacional de Rehabilitación, dio respuesta a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.**

- a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43169/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración de la Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral
- b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio CONADIS/DGAALAJ/AJU/049/2018, el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la CONADIS, dio respuesta a la solicitud formulada en la que señaló no ser competente para remitir la información requerida.

- **Solicitud de información al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.**

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43302/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración del Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio D.D.N.205.300.00/030/2018, el Director de Desarrollo Normativo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dio respuesta a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).**

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43303/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración de la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.
- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio CONAPRED/DGAELPP/DALAI/052/2018, la Subdirectora de Análisis Normativo del referido Consejo, dio respuesta a la solicitud formulada.

- **Solicitud de información a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.**

- a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43304/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la colaboración del Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para allegarse de mayores elementos y tener un enfoque más amplio de la discapacidad, conocer los parámetros que deben emplearse para conocer el grado de disminución sensorial de una persona y las implicaciones que ello puede tener en su vida laboral.

- b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio OAG-DCT-3681-2018, la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio respuesta a la solicitud formulada.

## **C O N S I D E R A N D O**

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 1, 394, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los actos de campaña de las y los candidatos independientes.
2. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México, resolvió revocar parcialmente el Dictamen Consolidado INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018 en lo que respecta a la conclusión 12.13\_C1\_P2 del Considerando 12.13.3.3, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la individualización de la sanción, únicamente para los efectos precisados en la resolución SCM-RAP-75/2018 y Acumulado, por lo que a fin de dar cumplimiento a la misma, se procederá a la modificación del Dictamen y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

*Capacidad económica.*

*El Actor refiere como agravio, que en la resolución combatida no se analizó debidamente su capacidad económica actual, pues los ingresos que percibía en el año dos mil diecisiete, no son los mismos que en la presente anualidad, por lo cual argumenta que la posibilidad de continuar laborando se ha visto mermada debido a una cirugía mal realizada, lo que generó que perdiera la capacidad auditiva del oído izquierdo.*

*Asimismo, alude diversas secuelas adversas a su persona, que lo coloca en situación de discapacidad, por lo que la sanción impuesta le genere un riesgo de subsistencia.*

*Contestación.*

*Esta Sala Regional considera que los agravios referidos a la vulneración de fundamentación y motivación en la individualización de la sanción son fundados y suficientes para considerar que la Autoridad responsable pueda analizar nuevamente la capacidad económica del Recurrente en la individualización de la sanción respectiva, como se explica.*

*Protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.*

*Respecto al tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad. Ello, con la finalidad de sugerir las directrices que involucren a personas con discapacidad.*

*En ese tenor, las autoridades tienen la obligación de centrar su atención en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, señalando con especial énfasis las medidas transformativas que deben adoptarse, ya sean culturales, actitudinales, en la infraestructura física, o en el contenido de los procesos y decisiones de las autoridades, para que sea ejercido con igualdad de condiciones que el resto de la población con discapacidad, lo que dará pauta a que gocen y ejerzan plenamente todos sus demás derechos.*

*Derivado de lo anterior, cualquier autoridad –incluidas por supuesto as de naturaleza electoral- que conozca de alguna cuestión o controversia en la que participe o se parte alguna persona que se autoidentifique con discapacidad, no debe considerar tal caso, como una cuestión ordinaria, susceptible de ser resuelta como mero trámite.*

*Sino que, en estos casos, debe advertirse la naturaleza y características de la cuestión planteada, de modo que en primer orden, se determine si conforme a las atribuciones que la norma aplicable le confiere a la autoridad responsable se pronuncie de fondo del caso concreto, considerando las directrices establecidas en el referido protocolo.*

*Caso concreto*

*En el recurso de apelación SCM-RAP-96/2018, el Actor hizo del conocimiento a esta Sala Regional, circunstancias médicas que se han actualizado en su entorno, y que trasciende en su vida personal, lo cual se considera suficiente para que con base en ellos, la Autoridad responsable realice una nueva individualización de la sanción.*

*Lo anterior, porque de no analizarse esa posible situación de vulnerabilidad existiría el riesgo de emitir un pronunciamiento que pudiera agravar la situación personal del Actor, dado el daño físico que expresa, de ahí que se considera necesario que el Consejo General del INE, considere su situación de persona con discapacidad, para efectos de fijar la sanción respectiva.*

*En consecuencia, ante la eficacia del agravio hecho valer por la Actora, pues del análisis integral de la resolución reclamada se advierte que la Autoridad responsable no consideró la situación de vulnerabilidad que el recurrente afirma que se encuentra, por lo que se debe revocar la sanción impuesta, con la finalidad de que la Autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones aplique el 'Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad' y emita una nueva resolución al caso.*

### **Efectos.**

*Al resultar fundados los agravios relativos al número de eventos reportados en la agenda del recurrente, lo procedente es revocar a la conclusión 12.13\_C1\_P2 de la Resolución Impugnada, para que la Autoridad Responsable previa garantía de audiencia, emita un nuevo Dictamen y Resolución.*

*Por lo que hace a la individualización de la sanción impuesta al apelante, se instruye al Consejo General del INE para que, a la luz del Protocolo invocado, individualice la sanción impuesta al Actor.*

*Al respecto, la Autoridad responsable, podrá, de manera enunciativa y no limitativa, analizar en la nueva determinación lo siguiente*

- *Allegarse de mayores elementos para conocer las discapacidad, real y actual del recurrente.*
- *Solicitar la documentación necesaria para saber la capacidad económica actual del Actor.*
- *De considerar de manera objetiva alguna discapacidad, deberá; sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad del Actor.*
- *Tener presente un enfoque amplio de la discapacidad.*
- *Considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de incapacidad.*

*Para cumplir con lo ordenado, el INE contará con un plazo de veinte días naturales, contados a partir de la notificación de esta sentencia, debiendo informar a esta Sala regional respecto de la decisión que adopte, dentro de los tres días hábiles siguientes a que ello ocurra.*

*(...)"*

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la modificación al Dictamen y la Resolución ordenada, otorgando garantía de audiencia al actor respecto de los eventos observados en la conclusión 12.13\_C1\_P2; y reindividualizando la sanción tomando en cuenta la capacidad económica del candidato independiente, a la luz del Protocolo señalado.



4. Que de conformidad con lo expresamente ordenado por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad administrativa electoral procedió a consultar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”<sup>17</sup> expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a realizar diversas diligencias con la finalidad de allegarse de los elementos suficientes para *“conocer las (sic) discapacidad, real y actual del recurrente”, “sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad”, “tener presente un enfoque amplio de la discapacidad” y “considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de discapacidad.”*

En relación a lo anterior, el Protocolo señala que existen diversos enfoques y explicaciones en torno a lo que es la discapacidad y cómo la sociedad y el Derecho responden a la misma, así pues tomando como punto de partida el modelo social, el nuevo modelo de Derechos Humanos reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos, por ello, promueve que efectivamente los ejerzan en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna, reiterando su dignidad, así como el respeto por la diferencia que implica la discapacidad, lo cual conlleva la ausencia de conductas orientadas a la reproducción de estereotipos y a la exclusión y desventaja social de las personas con discapacidad; fomentando su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad, toda vez que sus necesidades y requerimientos son atendidos por la comunidad.

En ese sentido, el máximo Tribunal de Justicia de la nación cita el concepto de ‘discapacidad’ establecido en el inciso e) del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>18</sup>, en donde se define como un *“...concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.”*

Por otro lado, el Protocolo señala que existen diversos tipos de discapacidad, los cuales se apegan a lo establecido en el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siendo los siguientes:

---

<sup>17</sup> Disponible para su consulta en:

<https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo%20DiscapacidadISBN.pdf>

<sup>18</sup> <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

- **Discapacidad Física** (motriz o motora): Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- **Discapacidad Mental** (psicosocial): A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- **Discapacidad Intelectual**: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- **Discapacidad Sensorial**: Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos [*diversidad funcional*], y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Por otra parte, también se reconoce como un elemento primordial al momento de impartir justicia, la comprobación de la discapacidad para saber en qué situaciones se está frente a una persona con discapacidad.

Al respecto, se retoma lo establecido en la referida Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en donde se establece la atribución del Sector Salud de expedir un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad con validez nacional, mismo que deberá expedirse a través de un médico especialista en medicina de rehabilitación y bajo los términos de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Aunado a lo anterior, esta autoridad consultó el cuadernillo “Discapacidad auditiva. Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica”<sup>19</sup>, mismo que refiere que la audición significa oír y comprender lo que se dice, y resulta indispensable para la comunicación oral; lo anterior, tomando en cuenta que el oído transforma las ondas sonoras del exterior, las amplifica y las convierte en energía bioeléctrica para que el cerebro las procese y entienda.

Así también, se establece que “la pérdida auditiva es la incapacidad para recibir adecuadamente los estímulos auditivos del medio ambiente. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír; la persona afectada no sólo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar debidamente la información auditiva de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva.

La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la sociedad, por las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. Estas pérdidas repercuten en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y del lenguaje; también en la conducta, el desarrollo social y emocional, y el desempeño escolar y laboral.

El grado de pérdida se especifica de acuerdo con el umbral de intensidad que una persona escucha. Se mide en términos de qué tan fuerte debe ser el sonido para escucharlo, y la unidad de medida es el decibelio. Una persona que sufre una pérdida de 60 decibelios puede oír sonidos como el ladrido cercano de un perro grande, un chiflido fuerte o el motor de un camión; pero no puede escuchar sonidos de menor volumen o intensidad, como las palabras en una conversación, el trinar de un ave o el agua de un río.”

Asimismo, de acuerdo con el INEGI<sup>20</sup>, la prevalencia de algún tipo de la discapacidad en la población nacional en México para 2014 era de 6%, según los datos de la ENADID 2014, es decir, que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades

---

19

[https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion\\_educativa/Auditiva/3discapacidad\\_auditiva.pdf](https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Documentos/Atencion_educativa/Auditiva/3discapacidad_auditiva.pdf)

<sup>20</sup> <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/discapacidad/default.html>  
[http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/702825094409.pdf](http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf)  
[http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/76/702825497842/702825497842\\_23.pdf](http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/76/702825497842/702825497842_23.pdf)

evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales, y son estas personas, quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, en particular, por lo que hace a la discapacidad auditiva se considera a las personas que presentan pérdida o restricción de la capacidad para recibir mensajes verbales u otros mensajes audibles. Dicho déficit total o parcial se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído.

Adicionalmente a las consideraciones anteriores, la Unidad Técnica de Fiscalización recurrió a diversas Instituciones especializadas en temas de discapacidad y no discriminación, las cuales acorde a sus atribuciones, competencias y capacidades, aportaron la información que consideraron pertinente, resaltando las que se señalan a continuación.

Bajo esa tesitura, el Instituto Nacional de Rehabilitación detalló lo siguiente:

*“(…)*

*Indique cuáles son los parámetros que deben emplearse para determinar el grado de discapacidad sensorial auditiva en una persona adulta.*

*Los parámetros son resultado de los siguientes estudios:*

*-Estudio de audiometría tonal bilateral con vía aérea y vía ósea.*

*-Logoaudiometría.*

*-Búsqueda de reflejo epitelial.*

*-Potenciales auditivos provocados de tallo cerebral.*

*Estos son estudios indispensables para determinar la utilidad social del individuo.*

*Señale cuales son las condiciones de vida de desigualdad de una persona adulta con discapacidad sensorial auditiva parcial.*

*Ante una pérdida auditiva unilateral, el sujeto únicamente presenta dificultad para localizar la fuente sonora y una disminución para la discriminación sonora en ambientes con competencias auditivas, como son ambientes ruidosos de 60 decibeles o más.*

*(…)*

*Precise, en su caso, la previsibilidad en el ámbito laboral derivado del estado de discapacidad aludido.*

*Dificultad para la comunicación oral en ambientes con competencia auditiva, ambientes ruidosos de 60 decibeles o más.*

*Exponga las aclaraciones que a su derecho convenga.*

*Una vez contestadas las preguntas anteriores, **el presente caso tiene insuficiente información sobre el grado de pérdida auditiva del oído izquierdo pues no documenta con certeza que la pérdida auditiva para este oído sea total.***

***Una pérdida auditiva superficial no ocasiona al individuo el mismo grado de discapacidad que una pérdida auditiva severa o profunda.***  
(...)"

**[Énfasis añadido]**

En la misma tesitura, se solicitó la colaboración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en cuya respuesta manifestó:

"(...)  
*La audiometría es el estudio indicado para determinar el grado de audición de una persona adulta. En dicho estudio se determina la pérdida auditiva y si es unilateral o bilateral. Para considerarse una discapacidad auditiva debe ser a partir de una pérdida moderada en ambos oídos.*  
(...)

*El grado de discapacidad sensorial auditiva clínicamente se clasifica por la Organización Mundial de la Salud en superficial, moderada, severa o profunda, y puede ser unilateral o bilateral.*

*No se utiliza el término parcial, en el caso de ser superficial y unilateral no representa una limitación funcional.*

*En el caso de ser moderada puede representar dificultad para la comunicación interpersonal, y siempre y cuando se presente en ambos oídos.*

*En el caso de severa y unilateral representa una limitación para sus actividades sociales y laborales.*

*No obstante, **estas dificultades pueden ser corregidas con el uso de un auxiliar auditivo.***  
(...)

*Se observa desigualdad en los casos donde la familia no cuenta con los recursos económicos o de información para brindar una atención adecuada, si cuenta con ellos podemos afirmar, que su desarrollo e inclusión social será como el de cualquier otra persona.*

***Las oportunidades de empleo que pueda tener una persona con discapacidad sensorial dependen más de su grado de escolaridad y de las herramientas con las que cuente** (ya sea, lenguaje a señas, lectura labio-facial, uso de auxiliar auditivo) para comunicarse. Así como la causa de pérdida auditiva congénita o adquirida.*

*En el Sistema Nacional DIF, se cuenta con agencias de inclusión laboral, que promueven inclusión laboral de personas con discapacidad, una vez que son valoradas sus aptitudes y habilidades para el trabajo.*

*En el DIF Nacional existen programas de apoyo para la inclusión al empleo y la vida social de las personas con discapacidad auditiva, los cuales van dirigidos a brindar la orientación necesaria para que la persona con discapacidad cuente con los elementos para integrarse en un ámbito competitivo laboral, en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad, dicha atención se basa en la detección de las capacidades residuales del sujeto, y detectar los puestos factibles a desempeñar.*

*(...)*

*En el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la rehabilitación e Integración Laboral Iztapalapa en el departamento de rehabilitación para el trabajo durante el año 2017 se recibieron 80 casos de personas con discapacidad auditiva, el 80% de ellos fueron integrados al empleo competitivo y a la capacitación para el trabajo, el 20% restante se encuentra en proceso de atención médica o psicológica, se considera que en corto plazo serán candidatos a empleo.*

*(...)*

*En la experiencia de los departamentos de Inclusión Laboral que forman parte de los Centros de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF, la integración laboral de personas con discapacidad auditiva es considerada la de mayor éxito, ya que son bien recibidos por sus compañeros de trabajo y por los empleadores, por lo cual se muestran abiertos a la inclusión.*

*(...) **es importante mencionar que para emitir estas respuestas se solicitó el apoyo de un médico especialista en comunicación humana.***

*(...)”*

**[Énfasis añadido]**

Precisado lo anterior, conviene resaltar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, párrafo 4, señala que se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Al respecto, el multicitado Protocolo establece que “la doctrina sobre el tema señala que la obligación de llevar a cabo o no los ajustes dependerá del análisis que se haga en cada caso en concreto, debiendo tomar en cuenta, entre otros factores, los costos de la medida a realizar, el tamaño de la entidad que la debe poner en práctica y su situación financiera, la posibilidad de obtener algún tipo de apoyo o subvención para la realización de la modificación, la afectación de algún modo al resto de

personas que no se beneficiarán con la medida, así como los efectos discriminatorios que pudieran resultar para la persona con discapacidad, en caso de su no adopción.

Se resalta este último elemento, es decir, los efectos discriminatorios que pudiera tener para la persona con discapacidad el que no se lleve a cabo un ajuste razonable a su favor, toda vez que se considera que éste debe ser el principal factor a tomarse en cuenta para la determinación de si se está o no ante una obligación de este tipo, ya que no se debe olvidar que en todo caso, sea cual sea el motivo o argumento empleado para no llevarlo a cabo, el efecto de su omisión implicaría una discriminación indirecta, llegando al mismo punto en que se inició con su solicitud, es decir, una ausencia de igualdad de oportunidades.

En razón de ello se propone que en tales casos debe arribarse a una solución que, sin afectar de una manera gravosa a la parte obligada (y tomando debidamente en cuenta su situación particular), efectivamente se cumpla con la adecuación 'necesaria' (tal como la llama la Convención) para que las personas con discapacidad puedan gozar del entorno, los servicios, y del ejercicio de derechos como lo haría cualquier otra persona sin discapacidad. De lo contrario, en todo caso se podría argumentar la desproporcionalidad de la medida por cualquier motivo.

Un elemento más a destacar en el caso de los ajustes razonables atiende al hecho de que tales modificaciones deben llevarse a cabo atendiendo a casos concretos y particulares, tal cual lo señala la Convención, es decir, cuando colocan a la persona con discapacidad en una 'situación de desventaja sustancial en comparación con otras personas sin discapacidad'. Por lo que las desventajas que son menores o triviales no impondrán la obligación de llevar a cabo ajustes razonables.

Por lo tanto, en la determinación de un ajuste razonable durante la tramitación de un procedimiento, se debe atender a las valoraciones antes mencionadas, sin perder de vista la obligación prevista por la Convención en su artículo 13, consistente en llevar a cabo estos ajustes al procedimiento para asegurar que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia.

Determinación que quedará al arbitrio de la o el juzgador, el cual deberá tener un amplio conocimiento acerca de la discapacidad y toma de conciencia acerca de las barreras que inhiben la participación de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia para garantizar que se dicte el ajuste que más favorezca a la persona, atendiendo a su situación concreta, evitando que en su criterio o determinación influyan algún tipo de barreras actitudinales que propician una percepción negativa

de las personas con discapacidad, sobre todo negando su reconocimiento como personas titulares de derechos humanos.”

Derivado de lo anterior, se considera que de las diligencias realizadas y de la información obtenida esta autoridad cuenta con elementos suficientes *“sensibilizarse y tomar conciencia, sobre la condición de vida de desigualdad”, “tener presente un enfoque amplio de la discapacidad” y “considerar la previsibilidad en el ámbito laboral, derivado del estado de discapacidad”* y tener por presentada la documentación del candidato independiente relativa a la disminución de su capacidad auditiva. Lo anterior, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia que se acata.

5. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado**.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país,<sup>21</sup> mismo que para el ejercicio 2018, correspondió a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

---

<sup>21</sup>De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*



En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2018.

6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Al respecto, por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los candidatos independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral al emitir la resolución **INE/CG1111/2018** tomó en consideración la información presentada directamente por los candidatos, de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

Ingresos	Sanción
\$0 a \$100,000.00	Amonestación pública
\$101,000.00 a \$300,000.00	Hasta el 5%
\$301,000.00 a \$600,000.00	Hasta el 10%
\$601,000.00 a \$1,000,000.00	Hasta el 15%
\$1,000,001 a \$1,500,000.00	Hasta el 20%
\$1,500,001 en adelante	Hasta el 25%

No obstante, en estricto cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional, en el SCM-RAP-75/2018 y su acumulado, se advirtió que al comparar las cifras de ingresos y gastos del informe de capacidad económica presentado a esta autoridad durante el periodo de campaña por el candidato, no existe remanente en favor del ciudadano en comento.

Derivado de lo anterior, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza la capacidad económica actual y real del actor.

Por consiguiente, mediante oficio INE/UTF/DRN/43167/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara las

cuentas a nombre del C. José Máximo Pérez Romero, así como para que remitiera los estados de cuenta correspondientes al año dos mil dieciocho; sin embargo, de la respuesta emitida por parte de la autoridad bancaria, no se identificaron cuentas a nombre del entonces candidato independiente.

Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DRN/43170/2018, solicitó al Servicio de Administración Tributaria informara el régimen fiscal bajo el cual se encuentra inscrito el C. José Máximo Pérez Romero, así como la última declaración de impuestos presentada; sin embargo, de la respuesta emitida por parte de la autoridad Hacendaria, se tuvo conocimiento de que el candidato independiente está registrado bajo el “Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios” y que no presentó declaraciones de impuestos en el periodo de 2017 a 2018.

Por último, en respuesta a la garantía de audiencia el ciudadano en comento presentó los comprobantes de servicios de interconsulta, resultados de estudios de audiometría, control de ingreso a cirugía, recetas médicas, nota de egreso de hospitalización y formato de indicaciones post operatorias de cirugía de oídos, todo ello expedido por el INR.

En las relatadas condiciones, todas las circunstancias y documentación antes señaladas, serán analizadas a la luz del multicitado Protocolo, atendiendo al caso en concreto y en particular, en cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional.

En estas condiciones, mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sean suficientes sobre la capacidad económica actual del recurrente y tomando en consideración lo expresamente manifestado en el recurso de apelación que por esta vía se acata, esta autoridad en la imposición de la sanción deberá optar por imponer aquella que corresponda a las circunstancias particulares del caso.

7. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG1110/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **12.13**, conclusión **12.13\_C1\_P2**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los términos siguientes:

“(...)

## 12.13. José Máximo Pérez Romero

(...)

Observación						Oficio de contestación S/N de fecha 4 de septiembre de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
El sujeto obligado presentó la agenda de eventos; de su revisión se observó que reportó un evento previo a su realización, sin embargo, éste no cumplió con la antelación de siete días que establece el artículo 143 bis del RF. Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro:						En cuanto al punto número 1, (uno) del oficio de requerimiento que nos ocupa, manifiesto que efectivamente por un error de cálculo que no fue de intencional ya que desafortunadamente se hizo un cálculo mal en cuanto a los 7 días que la ley otorga para informar sobre la realización de los eventos, siendo entonces que el suscrito dio de alta el indicado evento no con los 7 días de anticipación sino únicamente con 06 días, sin embargo reitero que no fue intención del suscrito dado que se debió a un error de cálculo de los días pues se entendió que el día de la celebración del evento fue considerado como el suscrito como un día más que se contabilizaba dentro de esos 07 días, razón por la cual se reportó este evento que nos ocupa únicamente con 06 días de anticipación, empero, manifestó que solicito sea tomado en consideración que el suscrito es un total inexperto en el uso del sistema de fiscalización ya que es la primera vez que lo conocí además de que por falta de conocimientos en dicho sistema el de la	No atendida	12.13_C1_P2	Eventos registrados	Artículo 143 Bis del RF
ID	Evento	Fecha del evento	Fecha creación	Nombre del evento	Días de antelación					
00010	No Oneroso	15-06-18	09-06-18	Recorrido por el candidato sin partido y concejales por las calles de las colonias Barrio San Francisco San Francisco San Jerónimo Aculco	6		De la verificación al SIF, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez aun cuando el sujeto obligado manifestó que por error el evento señalado en el cuadro que antecede no fue reportado dentro de los plazos establecidos en la normatividad, señalando que el error se debió al no tener conocimientos en el manejo del SIF.	El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.	Artículo 143 Bis del RF
Se le solicita presentar en el SIF, si así lo considera pertinente, las aclaraciones que a su derecho convengan.							De lo anterior aun cuando el sujeto obligado señaló no tener conocimientos sobre el manejo del SIF, esto no lo exime de la responsabilidad de tener que reportar los eventos con una antelación de al menos 7 días a la fecha en que se llevaran a cabo los eventos, a través del SIF en el módulo de agenda de eventos; por tal razón, la observación no quedó atendida.			
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 bis, numeral 1 del RF.										

Observación  Oficio: INE/UTF/DA/43198/18	Oficio de contestación S/N de fecha 4 de septiembre de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	voz incurrió en dicha situación (...)"				
<p>Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia SCM-RAP-75/2018 y acumulado, se le solicitar presente en el SIF:</p> <p>- La documentación que permita conocer a esta autoridad la discapacidad real y actual que arguyó el sujeto obligado en el expediente SCM-RAP-75/2018.</p> <p>- Las aclaraciones que a su derecho convengan.</p>	<p>2.- En cuanto al correlativo que se contesta del oficio de errores y omisiones que nos ocupa, manifiesto que efectivamente en la actualidad el suscrito no cuenta con ingresos económicos dado que por una cirugía mal practicada sufre actualmente con una discapacidad que no me permite tener una vida laboral y personal normal, pues he perdido la audición del oído izquierdo y disminuido la del oído derecho, además de que debido a la cirugía que menciono desde que se practicó al de la voz el mismo sufre de vértigo y mareos los cuales han venido empeorando con el paso del tiempo, aunado al hecho de que el oído izquierdo causa un zumbido tan fuerte que no permite la mayor parte del día tener audición con el oído derecho que además se encuentra también disminuida, por ende, en este momento el de la voz se encuentra imposibilitado para cubrir cualquier multa que se impusiera al de la voz porque no cuento con capacidad económica actualmente para cubrirla, y si bien el de la voz inicialmente al momento de registrarse como aspirante a candidato dijo percibía anualmente la cantidad que se mencionó en el mismo informe, debo decir que resulta evidente, que por la fecha en que se llevó</p>	<p>Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la información que obra en es SIF, se observó que presentó 3 formatos de "Solicitud de interconsulta" un formato de "cirugía", estudios realizados de audiología, una "Nota de egreso de hospitalización", una "Receta consulta externa", así como 2 hojas de "Indicaciones postoperatorias cirugía oídos", evidencia con fechas de agosto a octubre de 2017.</p> <p>Respecto a la valoración de la capacidad económica en comento será objeto de análisis en la resolución del presente Dictamen.</p>			

Observación <i>Oficio: INE/UTF/DA/43198/18</i>	Oficio de contestación S/N de fecha 4 de septiembre de 2018	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p>a cabo dicho registro de aspirante, los ingresos reportados se referían al año 2017, pero no al año en curso, siendo que actualmente y desde el mes de agosto de 2017 en que me fue practicada dicha cirugía el de la voz se encuentra imposibilitado físicamente para desempeñarse laboralmente, aunado al hecho de que apelo al criterio de nuestro máximo tribunal en el sentido que no debe darse el mismo trato a un particular que a un partido político dado las desventajas en que se encuentra el particular y debido a la eventualidad con que en este caso el suscrito ha participado en el Proceso Electoral 2017-2018, que ha sido por única ocasión mientras que los partidos políticos lo hacen de forma permanente y constante, por lo que solicito se tome en consideración al momento de resolver el presente asunto, por lo que a efecto de acreditar lo aquí dicho anexo como documental adjunta al presente la documentación que acredita lo que vengo manifestando en el presente punto.</p>				

En este orden de ideas, se han realizado las modificaciones a la parte conducente Dictamen Consolidado, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional de la Ciudad de México dentro del expediente número **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado.**

8. Realizado lo anterior, toda vez que la Sala Regional Ciudad de México, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada

como **INE/CG1111/2018**, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando **12.13.3.3**, conclusión **12.13\_C1\_P2**, y lo relativo a la individualización de la sanción en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los términos siguientes:

(...)

**b)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 12.13\_C1\_P2**.

No.	Conclusión	Monto involucrado
12.13_C1_P2	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración”.</i>	N/A

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de cinco días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con anterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) del presente considerando.  
(...)

### **c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN**

**Por lo que hace a las conclusiones 12.13\_C2\_P1, 12.13\_C1\_P2, 12.13\_C3\_P2.**

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del candidato independiente, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Visto lo anterior, se desprende que el candidato independiente referido incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de transparencia y certeza en la rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe ingresos y gastos la campaña del sujeto infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Informe de Capacidad Económica, que permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima.

Máxime cuando esta autoridad tuvo a la vista constancias exhibidas por el candidato, con las que acredita que ha erogado recursos económicos en beneficio de su salud. Es así que, esta autoridad tiene la obligación de atender a la situación económica del infractor, a la luz de que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable.

En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha sanción es la **Amonestación Pública**.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al candidato independiente no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.



Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia **"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL"**, esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

*"Registro No. 192796*

*Localización: Novena Época*

*Instancia: Segunda Sala*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999*

*Página: 219*

*Tesis: 2a./J. 127/99*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** *Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es*

*que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.*

*Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>22</sup> pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

---

<sup>22</sup> Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.

Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA**", la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.**

*No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**

*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."*

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta
a)	12.13_C2_P1	Tiempo real (1er Periodo)
a)	12.13_C3_P2	Tiempo real (2do Periodo)
b)	12.13_C1_P2	Eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración.

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al candidato independiente, el **C. José Máximo Pérez Romero**, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Que la sanción originalmente impuesta al **C. José Máximo Pérez Romero**, en la resolución **INE/CG1111/2018** en su Resolutivo **VIGÉSIMO**, así como las modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo, se resumen a continuación:

Sanciones en Resolución INE/CG1111/2018	Modificación	Sanción en Acatamiento a SCM-RAP-75/2018 y acumulado
<p><b>VIGÉSIMO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>33.12.3.3</b> de la presente Resolución, se imponen a la Candidata Independiente <b>José Máximo Pérez Romero</b>, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones <b>12.13_C2_P1, 12.13_C3_P2.</b></p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión <b>12.13_C1_P2.</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>178</b> (Ciento setenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de <b>\$7,495.80</b> (Siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 80/100 M.N.).</p>	<p>Se realiza una nueva individualización e imposición de la sanción al no tener certeza respecto de la capacidad económica actual y real del actor, en consecuencia se determina imponer la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.</p>	<p><b>VIGÉSIMO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>33.12.3.3</b> de la presente Resolución, se imponen a la Candidata Independiente <b>José Máximo Pérez Romero</b>, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones <b>12.13_C2_P1, 12.13_C3_P2.</b></p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión <b>12.13_C1_P2.</b></p> <p>Una <b>Amonestación Pública.</b></p>

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se imponen al **C. José Máximo Pérez Romero**, las sanciones siguientes:

**VIGÉSIMO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **33.12.3.3** de la presente Resolución, se imponen al Candidato Independiente **C. José Máximo Pérez Romero**, las sanciones siguientes:

a) **2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones **12.13\_C2\_P1** y **12.13\_C3\_P2**.

b) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **12.13\_C1\_P2**.

Una **Amonestación Pública**.

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG1110/2018** y la Resolución **INE/CG1111/2018**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades de campaña de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, en los términos precisados en los Considerandos **7, 8 y 9**, del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-75/2018 y Acumulado SCM-RAP-96/2018**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

**TERCERO.** Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que proceda a publicar en el periódico o gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México, la amonestación pública impuesta al **C. José Máximo Pérez Romero**, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme.

**CUARTO.** Notifíquese electrónicamente el presente Acuerdo al Candidato Independiente, a través del Sistema Integral de Fiscalización

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**